RV: RCDO 015 2018 00538 00 RECURSO DE REPOCISION EN SUBSIDIO APELACION

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 12/05/2022 14:17

Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellín
<j03ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Paula Andrea Bedoya Agudelo
<pbedoyaa@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Paula Andrea Betancur Ospina <pbetancuo@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Conde Uriel <urielconde@yahoo.com>

Enviado: jueves, 12 de mayo de 2022 13:48

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
lopezabogado@hotmail.com <lopezabogado@hotmail.com>; harg1@hotmail.com <harg1@hotmail.com>;
harveygiraldo10@yahoo.com <harveygiraldo10@yahoo.com>; henrygiraldo52@gmail.com <henrygiraldo52@gmail.com>;
jbg077@hotmail.com <jbg077@hotmail.com>; jgladis1@hotmail.com <jgladis1@hotmail.com>; masterllaves@hotmail.com
<masterllaves@hotmail.com>; leistonrg@hotmail.com <leistonrg@hotmail.com>

Asunto: RCDO 015 2018 00538 00 RECURSO DE REPOCISION EN SUBSIDIO APELACION

Doctor

**JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
MEDELLIN - ANTIOQUIA**

RADICADO: 05001310301520180053800

Se adjunta el memorial del recurso en 6 folios en formato PDF

Cordialmente

URIEL CONDE C.

Abogado

Cel: 320 696 70 52

Medellín

urielconde@yahoo.com

Doctor

JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
MEDELLIN - ANTIOQUIA

REFERENCIA	EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA
DEMANDANTE	LESITON F. RAMIREZ GIRALDO Y OTROS
DEMANDADOS	MARLENY PARRA JIMENEZ y OTROS
RADICADO	05001 3103 015 2018 00538 00
ASUNTO	RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACION CONTRA AUTO 208V

URIEL CONDE CAMPOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.296.242 de B/manga, portador de la Tarjeta Profesional No. 271.518 del Consejo Superior de la Judicatura y con dirección electrónica, urielconde@yahoo.com, inscrita en el SIRNA; actuando en calidad de apoderado especial de los ejecutados en el proceso de referencia; respetuosamente concurrimos al despacho e interpongo RECURSO DE REPOSICION en **subsidio apelación**, en contra de la providencia fechada el día 6 de MAYO de 2022, AUTO 208V, mediante el que se resolvieron diversas cuestiones, recurso encaminados a los contenidos en los aparte que se describen en la siguiente sustentación del recurso, contra de la referida providencia.

SUSTENTACION DEL RECURSO

En auto aquí recurrido, el despacho mediante decisión del 6 de MAYO hogaño, notificado en estados el día 9 de mayo del corriente, donde resuelve sobre las solicitudes de las partes y varias presentadas por el suscrito son denegadas, sustento el recurso en lo siguiente:

1. Respecto de lo decidido en los dos últimos párrafos de la **página 2 del AUTO impugnado**:

Es del caso anotar, que las obligaciones que aquí se ejecutan, se desprenden de la condena en perjuicios a lo que fueron condenados los demandados en la sentencia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, del 16 de octubre de 2013, que casó parcialmente la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, del 20 de mayo de 2013 (fl 69-111). En ese contexto, se declara impróspera la objeción presentada.

Sea lo primero y fundamental, advertir que el despacho en dicho aparte de la providencia, declara impróspera la objeción a la liquidación del crédito, presentada por el suscrito, con el argumento que ***“pretensión que no resulta precedente en esta oportunidad por extemporánea, pues tal presupuesto debió alegarlo dentro del término de tres días siguientes a la notificación que se le hizo del mismo; ...”*** (negritas y cursivas mías) lo cual hace huelga el suscrito y no le asiste razón al despacho, que ante semejante prueba que se aportó, que ya se pagó el 75% de la suma que aquí se ejecuta, y que solo se adeuda el 25% de dicha ejecución, el Despacho decida como si nada, seguir adelante con la ejecución y la liquidación de crédito presentada no se tuvo en cuenta; porque disque *“no se hizo conforme lo ordenado en el auto que libro mandamiento de pago, ni en el que ordeno seguir adelante con la ejecución”*.

Lo cual es totalmente violatorio, no solo de la ley y la jurisprudencia, sino del principio constitucional de la administración de justicia, consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, que consagra claramente la **prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal**, y aquí el despacho obstaculiza, trunca la realización del derecho sustancial a mis representados.

También es violatorio del artículo 2 de nuestra Carta Magna, que consagra el fin esencial del Estado, de "...garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución".

Y es el A Quo, el primer llamado a hacer valer el imperio de la Constitución y de la ley en beneficio de quienes, por razones justificadas, reclaman su protección, como lo es el caso que nos ocupa y hace caso omiso a tal deber.

Y es que así, lo ha decantado en muchas sentencias la Honorable Corte Constitucional, sobre la prevalencia del derecho sustancial, sobre el derecho procesal, como la Sentencia SU 913 del 11 de diciembre de 2009, con ponencia del Dr. JUAN CARLOS HENAO, donde preciso claramente:

"2.1. La interpretación adecuada de la primacía anotada significa que los procedimientos legales adquieren su sentido pleno en la protección de los derechos de las personas. En consecuencia, cuando la aplicación de una norma procedimental pierde el sentido instrumental y finalista para el cual fue concebida y se convierte en una mera forma inocua o, más grave aún, contraproducente, el juez debe obviar el trámite formal en beneficio del derecho fundamental afectado."

Igualmente lo ha decantado en otras sentencias, como la T-1306 de 2001, T-268 de 2010, la C-499 de 2015, la C-095 de 2017, la SU-061 de 2018, entre muchas otras.

Hay que traerle a colación al A-Quo, que el derecho sustancial consagra claramente, que una de las formas de extinguir las obligaciones es **Por la transacción**. Y así reza el artículo **1625 del Código Civil en su numeral 3**, y está suficientemente probado que el 75% de la obligación que aquí se ejecuta ya fue transada, ya fue extinguida, como obra en la prueba suficiente aportada en el expediente a folios 389-408 y conforme se explicó claramente en el memorial presentado el día 11 de octubre de 2021 y sus anexos.

Es más aun, en el TRASLADO 040 del día 9 de diciembre de 2021, se dio termino a la parte ejecutante de la OBJECION A LA LIQUIDACION DEL CREDITO, y parte ejecutante guardo silencio, es decir no se opuso pues ante semejante prueba, donde el mismo JULIO LOPEZ, quien dice llamarse apoderado de víctimas, fue quien firmo las dos TRANSACCIONES aportadas al proceso, con presentación personal ante Notaria, le quedaría muy difícil, negar, desconocer que el 75% por ciento de esta ejecución aquí reclama ya fue transada y por ello guardo silencio; **sin embargo el Despacho, se niega a reconocer la prevalencia del Derecho sustancial sobre las formas procesales.**

Adicionalmente, el suscrito no encuentra en el expediente, el anexo # 3, denominado, "**Copia del original en formato PDF, del escrito de reforma de demanda y desistimiento de las pretensiones a favor de JUAN BAUTISTA JIMENEZ y las familias otras dos familias GRAJALES JIMENEZ y JIMENEZ VARGAS.**" Anexo que fue enviado en el memorial radicado el día 11 de octubre, y que fue adjuntado por medio de link de google drive; (<https://drive.google.com/file/d/1ULKmPCbPzU7ppSDVngTTNLq5fk5kspO3/view?usp=drivesdk>) en el cual el apoderado JULIO LOPEZ, hace hincapié, en la reforma de la demanda que HOY cursa en el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION CIVIL CIRCUITO, que solo se adeuda el 25% correspondiente a los hermanos PARRA JIMENEZ y que el otro 75% ya fue transado por las otras 3 familias condenadas a indemnizar, como ya se ha dicho y probado hasta la saciedad.

1.1 **Sobre la revisión del mandamiento de pago.**

Está posibilidad y más que ello, **obligación, del funcionario dentro del proceso ejecutivo** era absolutamente clara en el Código de Procedimiento Civil, porque así lo disponía el inciso segundo del artículo 497, con el siguiente tenor literal:

“Inc. 2º. Adicionado Ley 1395 de 2010, art. 29. Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Con posterioridad, no se admitirá controversia sobre los requisitos del título, **sin perjuicio del control oficioso de legalidad**” (negrilla fuera del texto).

Con ello se impone al juez la obligación de una revisión del título ejecutivo con posterioridad al mandamiento de pago, sobre todo, al momento de ordenar que se siga adelante la ejecución y en la oportunidad de la liquidación del crédito.

En el Código General del Proceso esa posibilidad, en principio, fue excluida en el artículo 430, al disponer que **“No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso”** y que **“En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso”**. Sin embargo, de ese mandato aparentemente claro, ya **la Corte Suprema en sede de tutela se ha pronunciado en el sentido de la procedencia de ese control**, entre otras, en la STC18432-2016, del 15 de diciembre de 2016, rad.2016-00440-01, reiterada en la sentencia STC14595-2017 del 14 de septiembre de 2017, M. P. Dr. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO. Así pues, en vigencia de los dos últimos códigos procesales civiles, **no solo es posible, sino obligatorio, el control de legalidad del título ejecutivo posterior al mandamiento de pago en sus aspectos formales y sustanciales**.

Y cuando digo sustanciales, lo es porque lo que prohíbe aparentemente el artículo 430 del C. G. P., es el control sobre aspectos formales del título ejecutivo; **pero cuando se trata del contenido mismo del título**, sobre la obligación que de manera expresa debe contener, estamos en presencia de algo más que formal y para el caso se trata de si más allá del título se pueden cobrar capital que ya fue pagado, capital que ya fue extinguido por una transacción, que si estaban contenidos en la sentencia, pero que ya fueron transados.

También el Honorable Consejo de Estado, en diferentes oportunidades se ha referido al tema que nos ocupa en esta oportunidad procesal -del artículo 446 del C.G. del P.-, y ha analizado la citada disposición, si en la liquidación del crédito existe la posibilidad de modificar el mandamiento de pago; en torno a ello la sala de lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION 2 , con ponencia del Dr RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS, en sentencia del 28 de noviembre de 2018, radicado 23001 2333000 2013 00136 01; se expuso que:

“(…)

- i) El juez no se encuentra facultado para abstenerse de tramitar los procesos ejecutivos, por considerar que lo pretendido excede lo ordenado en la sentencia judicial objeto de cumplimiento, sin haber realizado el estudio jurídico correspondiente, pues tal apreciación debe ser objeto de debate a través de los mecanismos de contradicción y defensa establecidos para esta clase de procesos. En efecto, «la ley procesal solamente exige que con la demanda se acompañen los documentos que constituyan el título ejecutivo y que el mandamiento de pago debe librarse en la forma pedida por el actor, o, dado el caso, en la que el juez lo considere, de tal manera que cualquier reparo sobre las sumas cobradas debe ser objeto de debate durante el trámite procesal»¹.
- ii) En la etapa de revisión de la liquidación del crédito que presenten las partes (artículo 446 del Código General del Proceso), el juez puede aprobarla o

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto de 25 de junio de 2014, radicado: 68001 23 33 000 2013 01043 01 (1739-2014), actor: Hair Alberto Ossa Arias.

modificarla. A su vez, «este trámite no puede llevarse a cabo antes de que se surtan los pasos que la ley ha previsto para el proceso ejecutivo»².

- iii) La estimación de la suma que el ejecutante considera adeudada no hace parte del título de recaudo que se pretende hacer valer en los procesos ejecutivos, sino que se trata de una tasación estimativa de los valores que a su juicio se deben pagar, razón por la que estas cuantías pueden ser controvertidas por el ejecutado a través de la presentación del recurso de reposición, la presentación de excepciones o en la etapa de liquidación del crédito³.
- iv) **Si con posterioridad a librar el mandamiento de pago, el juez se percata que aquél se profirió por mayor valor al que correspondía de conformidad con la sentencia judicial cuyo cobro se pretendía, está facultado para subsanar la inconsistencia advertida, pues los artículos 42 del Código General del Proceso y 207 del CPACA le imponen el deber de realizar el control de legalidad de la actuación procesal, una vez agotada cada etapa del proceso⁴. (...)** negrillas mías.

Así las cosas, y existiendo una clara violación a los principios constitucionales y legales, es que se dirige esta acción a fin de que el despacho declare prospera la objeción a la liquidación de crédito y en su lugar se la corrija ajustándola a los pagos por transacción ya realizados y aportados al proceso a los lineamientos de la jurisprudencia ya esbozada en este escrito o en su defecto que en alzada el competente así lo disponga, porque de lo contrario estaríamos frente a un defecto de la decisión judicial en los términos de la sentencia C590 de 2005 que daría pie a un reproche constitucional.

2. Respecto de lo dispuesto en la página 3 del AUTO impugnado:

Ahora, al revisar la liquidación del crédito presentada por la parte demandante (fl. 360), encuentra el Juzgado que se realizó conforme se ordenó en el auto de apremio, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 446 del Código General del Proceso se le **IMPARTE APROBACIÓN.**

El artículo 446, numeral 3 del C.G. del P., claramente dispone que el AUTO de liquidación de crédito es apelable, **cuando se resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta;** y lo decidido por el despacho sobre la no prosperidad de la objeción, altera totalmente la cuenta, pues no es cierto que el monto global de la liquidación para la fecha del 17 de julio de 2021, es la suma de **\$238.967.797**; tampoco la suma del capital adeudado es \$ 195.367.254,6; los interés está lejos de ser la liquidada por la parte ejecutante; impartir aprobación a la liquidación de crédito obrante a FOLIO 360, a junio 17 de 2021, **equivaldría a una clara violación al derecho sustancial y un grave quebranto a los principios constitucionales de la administración de justicia y a la ley adjetiva, y sin duda un enriquecimiento sin causa justa a los ejecutantes**

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 6 de agosto de 2015, expediente: 130012331000 200800669 02 (0663 - 2014), actor: Juan Alfonso Fierro Manrique.

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, consejera ponente: Dra. María Elizabeth García González, expediente: 11001-03-15-000-2018- 00824- 00, actor: Marta Isabel Ramírez Vanegas.

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia de 4 de octubre de 2017, expediente: 41001-23-33-000-2017-00161- 01(AC), actor: María Nayibe Gutiérrez Castro. En igual sentido puede consultarse la sentencia de 15 de junio de 2018, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, consejero ponente: Dr. Hernando Sánchez Sánchez, expediente: 11001-03-15-000-2017-03370-01(AC), actor: Olinto Torres Vega

y un detrimento patrimonial a mis representados, cobrando nuevamente un pago ya transado con tres de las cuatro familias obligada a indemnizar, que representa el pago del 75% de las obligaciones impuestas en sentencia base de esta ejecución. Entonces,

- Teniendo en cuenta que fueron 20 los condenados penalmente, el total de la suma de la condena en costas, título de esta ejecución, se deberá dividir en 20, \$ 279.096.475/20 = **\$13.954.823 por pagar, cada uno de los 20 condenados.**

Del valor de la condena en costas, le corresponde a cada una de las 8 víctimas la suma de \$ **34.887.059**, por concepto de costas, por lo cual a las **5 víctimas aquí ejecutantes le correspondía el valor total de \$ 174.435.296**. De este último valor, la familia de JUAN BAUTISTA JIMENENEZ, ya cancelo el ¼ aparte (FLS 389-408); de igual manera lo hicieron las familias GRAJALES JIMENEZ y JIMENEZ VARGAS, cada una transando ¼ de la obligación base de esta ejecución.

- Así las cosas, se adeuda por la sentencia base de esta ejecución solo una ¼ parte de las costas base de este proceso ejecutivo a los aquí ejecutantes a saber, **la suma de \$ 43.608.824.**

Lo plasma la parte ejecutante en el libelo de REFORMA DE DEMANADA Y DESISTIMIENTO DE PRETENSIONES del radicado 2014 00246 a folios 286 en adelante en el proceso con radicado 016 2014 00246, que ya transo sobre las ¾ partes.

El título de ejecutivo NO PUEDE SER SUPERIOR a lo que les corresponde a los 5 demandantes en esta ejecución, pues reposan en el expediente los contratos de transacción, donde claramente en la CLAUSULA TERCERA de los dos contratos, se transo sobre las costas que todavía estaban en discusión, **a saber, la suma que se adeuda es de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 43.608.824).**

- **En conclusión, el real capital adeudado de las obligaciones solidarias es por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 43.608.824)** y no como la parte ejecutante presento la obligación a 21 de julio de 2021; por lo cual se interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación a este auto que resuelve la objeción a la liquidación de crédito presentada por la parte ejecutada, impartiendo aprobación a la presentada por la parte ejecutante a folio 360.

Entonces la LIQUIDACION DE CREDITO PRINCIPAL A FAVOR DE CADA UNO DE LOS CINCO EJECUTANTES, es la siguiente:

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
CAPITAL	10/08/2018		\$ 8.721.764 c/u
INTERESES	10/08/2018	21/07/2021	\$ 1.285.152
TOTAL			\$ 10.007.079

A cada uno de los ejecutantes se le adeuda a la fecha del 21 de julio anterior, la suma de \$ **10.007.079**, sobre la obligación base de la ejecución; para un total adeudado a los 5 ejecutantes por la suma de **CINCUENTA MILLONES, SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS m.l. (\$50.035.395).**

Respecto de la obligación de costas en este proceso que nos ocupa. Radicado 2019 00538, de igual manera deberán ser liquidadas conforme a la base de la obligación principal real y dejar sin efecto las ya liquidadas en auto del 26 de agosto de 2019.

En consonancia con el artículo 2 y 228 de la Constitución Política y con el artículo 4, artículo 11, 42, numeral 2 y 5, 132 y 430 del C. G. del P. principalmente la de saneamiento prevista en el

artículo 42 de la ya citada norma procesal; **se puede extraer claramente que el mandamiento de pago o una liquidación aprobada, no se convierte en una situación inamovible para el Señor Juez, pues con posterioridad a la expedición de estas providencia es posible variar el monto de las sumas adeudadas con el fin de adoptar una decisión que se ajuste a la realidad procesal de cara al título ejecutivo, así como a los demás elementos de juicio que obren en el expediente.**

PRETENSIONES

1. En consideración a lo ampliamente expuesto en este recurso solicito respetuosamente al despacho reponer el AUTO 208V del 6 de mayo hogaño, en su página 2, y en su lugar se declare la prosperidad de la objeción presentada, y conforme a la Constitución y la ley, de la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal y se aplique el desarrollo jurisprudencial que impone al juez la obligación de una revisión del título ejecutivo con posterioridad al mandamiento de pago, sobre todo, al momento de ordenar que se siga adelante la ejecución y en la oportunidad de la liquidación del crédito y **no solo es posible, sino obligatorio, el control de legalidad del título ejecutivo posterior al mandamiento de pago en sus aspectos formales y sustanciales.**
2. Se solicita al despacho que reponga la liquidación de crédito realizada por la parte ejecutante, obrante a folio 360 y que se le imparte aprobación en la tercera página del AUTO 208V, teniendo en cuenta las observaciones ya realizadas en este escrito, NUMERAL 2 del acápite anterior y se proceda a modificar la liquidación del crédito, liquidando sobre el verdadero valor adeudado a los ejecutantes, la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 43.608.824)** y se tenga en cuenta que el 75% de la obligación aquí ejecutada, ya se encuentra extinguida por el contrato de transacción realizado por las tres familias que suscribieron los contratos obrantes a folios 389-408 del expediente físico. Pues de no hacerlo se estaría configurando un posible enriquecimiento sin causa justa a los ejecutantes, y un detrimento al patrimonio a los deudores PARRA JIMENEZ, al seguir con pretensión de cobrar lo ya transado, valor que no corresponde, lo cual es ilógico y abiertamente contrario a la Constitución y la ley.
3. De no ser atendido de manera favorable el presente recurso, interpongo subsidiariamente el de apelación, con los mismos argumentos aquí expuestos, para que el superior en grado de conocimiento resuelva la controversia planteada con los argumentos aquí esgrimidos, conforme a lo cual solicito al despacho proceder de conformidad.

Sin otro particular,

Cordialmente,

URIEL CONDE CAMPOS
T.P.: 271.518 del C.S. de la J.
Apoderado Parte Ejecutada